

Señor Ministro:

Con 766 fojas vuelven a consideración de esta Fiscalía de Estado las actuaciones por las cuales la razón social "PINCEN S.A.", mediante apoderado, interpuso recurso de apelación contra la Resolución N° 223/2005-IND dictada por la Administración Provincial de Impuestos (A.P.I.).

- I -

ANTECEDENTES

A

En fecha 08.07.2004, mediante Resolución N° 807-7/2004 la Regional Rosario de A.P.I. determinó ajustes impositivos por los conceptos de Impuestos a los Ingresos Brutos a cargo del contribuyente, originados en diferencias a favor del Fisco provincial, por los períodos correspondientes desde enero a diciembre de los años 1997 a 2002 y por los aportes sociales Ley N° 5110 por los mismos períodos, a excepción del año 1997 donde los incumplimientos respecto a éste último tributo se determinaron por los períodos de marzo a septiembre y noviembre a diciembre. Asimismo, se determinaron ajustes por ciertos períodos abonados fuera de término, por ambos tributos -art. 1º-. En el mismo acto determinativo, se le requirió el pago de la suma establecida en la liquidación practicada, a efectuarse dentro del plazo de 15 días según lo dispuesto por el Código Fiscal -art. 3º- (262 y vta.).

A f. 65 obra requerimiento mediante el cual el ente recaudador en fecha 24.06.2003 había solicitado a la

firma involucrada diversa documentación y/o comprobantes, por diversos conceptos relacionados con los períodos 01.1996 al 09.2002 para verificar el cumplimiento de las leyes fiscales provinciales, siendo reiterados dichos pedimentos conforme surge de fojas 92, 120 y 153.

En fecha 18.08.2004, luego de notificado el decisorio el 27.07.2004, la firma sumariada interpuso recurso de reconsideración ofreciendo prueba documental, instrumental, informativa y pericial de la Caja de Valores S.A. (fs. 269/278).

En este estado, habiendo tomado intervención las oficinas técnicas pertinentes, como ser la Sub-dirección de Asesoramiento Fiscal (fs. 288 y vta.) y la Dirección General Técnica Jurídica (fs. 290/291 y 319), la Administración Provincial de Impuestos dictó Resolución N° 223/2005-IND mediante la cual hizo lugar parcialmente al recurso interpuesto, dejando sin efecto la pretensión relativa a las diferencias determinadas en concepto de Aportes Sociales Ley N° 5110, desestimando en lo restante la impugnación incoada, motivo por el cual requirió a la contribuyente el ingreso de las sumas correspondientes a las obligaciones incumplidas, que habían conformado la resolución recurrida (fs. 379/384).

Contra dicho decisorio, notificado al domicilio legal constituido (fs. 388 y vta.) la encartada en fecha 12.07.2005 interpuso recurso de apelación en los términos de los artículos 64 y siguientes del Código Fiscal (fs. 389/398).

En fecha 14.10.2005 la Administración Provincial de Impuestos dictó la Resolución N° 386/2005-IND (fs. 511/513), por la cual denegó la apelación por improcedencia formal al no haberse acreditado el cumplimiento de la exigencia del artículo 64 del Código Fiscal, notificándose el decisorio según consta a foja 516 vta.

En fecha 18.11.2005, el apoderado de la firma interpuso recurso de apelación directa por ante el Poder Ejecutivo, en los términos del último párrafo del artículo 66 del Código Fiscal (fs. 518/536).

Dando trámite a la impugnación, se ordenó la apertura de la causa a prueba, con costo de la producción de la misma la que fue notificada en fecha 06.01.2006 (fs. 546 y vta.), concediendo la recurrente su conformidad con esta última condición (fs. 547). El medio probatorio ofrecido consistió en pericial contable dirigida a demostrar la dificultad económica de la contribuyente para afrontar el depósito previo del tributo, según el requisito legal precitado.

La Dirección General de Asesoría Letrada del Ministerio de Economía, a través del Dictamen N° 48848 de fecha 15.02.2007 aconsejó la concesión del recurso interpuesto, fundado en la acreditación sumaria de la imposibilidad inculpable de afrontar el pago del tributo (fs. 588/590).

Esta Fiscalía de Estado tomó intervención emitiendo Dictamen N° 934/2007 por el cual sugirió hacer

lugar al recurso de apelación directo interpuesto (fs. 592/594).

En diversas ocasiones, la impugnante efectuó presentaciones a los fines de instar el procedimiento y evitar la caducidad de instancia prevista en el artículo 126 del Código Fiscal (cfr. fs. 599/601; 615/616; 621 y vta.; 624 y vta.; 625 y vta.; 642 y vta.; 668 y vta.; 672 y vta.; 674 y vta.; y 1 /2 del expediente agregado N° 13302-0839212-0).

A fojas 680/682 consta Decreto N° 426 de fecha 16.03.2023 mediante el cual se admitió el recurso de apelación directa impetrado por la contribuyente, disponiendo la sustanciación del recurso de apelación por ella oportunamente incoado.

Dando trámite a la impugnación admitida, se corrió traslado para la expresión de agravios, notificación que fue recepcionada el 07.11.2011 en el domicilio legal denunciado (fs. 705 y vta.); la interesada, a través de apoderados, presentó el correspondiente memorial el 30.11.2023 (fs. 721/755).

La Dirección General de Asesoría Letrada del Ministerio de Economía volvió a tomar intervención mediante Dictamen N° 60044/2023, a través de cual aconsejó hacer lugar al recurso de apelación incoado (fs. 760/764).

A foja 766 vta, se elevan las presentes actuaciones a Fiscalía de Estado para su consideración.

B

Los agravios de la recurrente se focalizan en torno a las siguientes cuestiones: prescripción de la totalidad de los conceptos y períodos fiscales reclamados, como también de la acción para aplicar sanciones, postulando la inconstitucionalidad de las normas del digesto fiscal y de las leyes locales sobre la materia; nulidad de la resolución apelada por violación del debido proceso, del derecho de defensa, de la división de poderes y de la competencia; nulidad por ausencia de motivación invocando la arbitrariedad; nulidad por la veda o imposibilidad de producción de prueba ofrecida; violación de los principios de legalidad y reserva legal al avanzar el Poder Ejecutivo sobre exenciones legalmente establecidas, planteando la inconstitucionalidad del Decreto N° 58/1196 y postulando la plena vigencia del artículo 160 incisos n) y ñ) del Código Fiscal; plantea la discriminación a la que A.P.I. somete a la encartada, respecto de otras empresas, imposibilitándola competir en igualdad de condiciones; improcedencia de los Aportes Sociales Ley N° 5110 y de la aplicación de intereses; improcedencia de la sanción de multa, argumentando al respecto la inconstitucionalidad del artículo 45 del digesto fiscal (conf. texto vigente a la fecha de los hechos), por violación del artículo 75 inciso 12 de la Constitución Nacional y por violación de la garantía del plazo razonable, postulando la ausencia del fundamentos y la atipicidad. Mantiene la reserva del caso federal.

- II -

ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN

A

El recurso traído a examen resulta admisible por cuanto ha sido interpuesto dentro del plazo legal (cfr. art. 66 último párrafo del Código Fiscal), considerando las fechas de notificación de la resolución impugnada (cfr. f. 388 vta.) y de la interposición del recurso (fs. 389/398).

En el mismo sentido, vale sostener la admisibilidad ya que el memorial de agravios fue presentado en tiempo hábil.

B

El recurso de apelación en cuestión debe prosperar fundado en razones de índole constitucional, convencional y jurisprudencial referidas a las exigencias de plazo razonable que hace al derecho de defensa y debido proceso.

El derecho a ser juzgado en un plazo razonable tiene rango convencional por lo dispuesto en los artículos 25 y 8 inciso 1) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Los tratados internacionales de derechos humanos han sido incorporados al plexo constitucional en virtud del artículo 75 inciso 22 de nuestra Constitución Nacional.

A su vez, nuestra Carta Magna dispone en su artículo 18 la inviolabilidad de la defensa en juicio de

la persona y sus derechos. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que "... la garantía constitucional de la defensa en juicio incluye el derecho a obtener un pronunciamiento rápido dentro de un plazo razonable (Fallos 287:248; 289:181; 305:913), pues la dilación injustificada de la solución de los litigios implica que los derechos puedan quedar indefinidamente sin su debida aplicación, con grave e irreparable perjuicio de quienes los invocan (Fallos 308:694; 315:1940)" (Fallo 324:1944). De esta manera, la jurisprudencia nacional ha inferido el derecho a un pronunciamiento jurisdiccional en un plazo razonable del derecho a la defensa en juicio.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que "... esta Corte considera que cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal en los términos del artículo 8 de la Convención Americana" (Corte IDH, Caso Tribunal Constitucional vs. Perú, Sentencia del 31.01.2001, pár. 71). Es decir, los derechos vinculados al debido proceso no deben entenderse restringidos al ámbito del Poder Judicial, sino que se extienden a cualquier órgano que ejerza funciones jurisdiccionales; en este caso, la Administración.

Ahora bien, para determinar los criterios de la razonabilidad del plazo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que se deberá considerar "a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; c) la conducta de las autoridades judiciales y

d) el análisis global del procedimiento" (Fallos 335:1126).

A su vez, el ordenamiento provincial en materia administrativa comparte ese mismo criterio en el artículo 1º inciso 9) del Decreto N° 4174/15 que resulta aplicable al caso, en virtud del artículo 6 del Código Fiscal. Allí se sostiene que el plazo para la finalización del procedimiento administrativo *"... no podrá exceder aquél que resulte razonable en atención a la naturaleza y complejidad de la cuestión objeto de debate"*.

Los hechos muestran una dilación de quince años entre el 12.11.2007 cuando Fiscalía de Estado emite el Dictamen N° 934/2007 (fs. 592/594) que aconseja hacer lugar al recurso de apelación, y el 16.03.2023 cuando el Poder Ejecutivo emitió el Dictamen N° 426/2023 que hace lugar al recurso de apelación directa. A su vez, en dicho período constan al menos seis proyectos de decreto en ese sentido (fs. 595, 598, 605, 609, 614 y 629/639).

La plataforma fáctica del caso, entonces, no permite sostener la razonabilidad de los plazos en los que el procedimiento se ha ido desarrollando. Corresponde, por lo tanto, hacer lugar al recurso interpuesto por "Pincen S.A." en virtud de la protección del derecho a obtener un pronunciamiento jurisdiccional en un plazo razonable.

En este sentido, compartimos criterio con lo dictaminado por la Asesoría Jurídica preopinante cuando a fojas 760/764, y por las mismas razones que las aquí expuestas, aconsejó hacer lugar al recurso.


Asimismo, y atento a lo expuesto, resulta argumentativamente irrelevante proseguir con el análisis de lo agraviado.


- III -

CONCLUSIÓN

Por todo lo expuesto, esta Fiscalía de Estado aconseja hacer lugar al recurso de apelación interpuesto, mediante apoderado, por "Pincen S.A." contra la Resolución N° 223/2005-IND de la Administración Provincial de Impuestos (A.P.I.).

DESPACHO, 15 MAR 2024
M.C.G.


MARÍA CECILIA GON
ABOGADA
FISCALÍA DE ESTADO


Dr. DOMINGO RONDINA
FISCAL DE ESTADO DE LA
PROVINCIA DE SANTA FE